

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: FRANCISCO JAVIER VELEZ LARA
DEMANDADO :	: ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A.
TIPO DE PROCESO	: EJECUTIVO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-009-2020-00352-01
RADICADO INTERNO	: 137-21
DECISIÓN	: SE ABSTIENE DE CONOCER RECURSO. SUSCITA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA
ACTA NÚMERO	: 181

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte ejecutante dentro del auto de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

ANTECEDENTES

La parte ejecutante interpuso demanda ejecutiva de mayor cuantía en la cual se pretende lo siguiente:

“PRIMERA: Que se libre mandamiento de pago en contra de ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A. ESIMED. S.A. y a favor del Dr. FRANCISCO JAVIER VÉLEZ LARA, por concepto de capital, los valores que a continuación se enuncian, contenidos en las siguientes facturas como títulos ejecutivos:

1. Por la Factura No.5697 el valor de CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 50.670.640)

- 2.** Por la Factura No.5698 el valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (\$10.477.392.)
- 3.** Por la Factura No.5699 el valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$10.868.580).
- 4.** Por la Factura No.5702 el valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS (\$41.570.460).
- 5.** Por la Factura No.5703 el valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOCE PESOS (\$12.216.012).
- 6.** Por la Factura No.5704 el valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$10.968.225)
- 7.** Por la Factura No.5708 el valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$35.432.000).
- 8.** Por la Factura No.5709 el valor de TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (\$13.267.230).
- 9.** Por la Factura No.5710 el valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$4.387.850).
- 10.** Por la Factura No.5712 el valor de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS (\$31.705.098).
- 11.** Por la Factura No.5713 el valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$15.693.956).
- 12.** Por la Factura No.5714 el valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$4.857.750).
- 13.** Por la Factura No.5718 el valor de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$27.418.584).
- 14.** Por la Factura No.5719 el valor de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$14.360.850).
- 15.** Por la Factura No.5720 el valor de TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$3.536.950).
- 16.** Por la Factura No.5724 el valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$6.654.960).
- 17.** Por la Factura No.5726 el valor de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL VEINTISEIS PESOS (\$22.290.026)
- 18.** Por la Factura No.5732 a ESIMED S.A., el valor de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (\$21.745.000).

- 19.** Por la Factura No.5733 el valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA (\$3.635.480).
- 20.** Por la Factura No.5735 el valor de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2.181.400)
- 21.** Por la Factura No.5745 el valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS (\$35.662.124).
- 22.** Por la Factura No.5746 el valor de SEIS MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$6.023.344).
- 23.** Por la Factura No.5747 el valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS (\$2.933.700)
- 24.** Por la Factura No.5749 el valor de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA. (\$32.605.970)
- 25.** Por la Factura No.5750 el valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$5.822.264).

SEGUNDA: Que se libre mandamiento de pago en contra de **ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A. ESIMED. S.A.** y a favor del Dr. **FRANCISCO JAVIER VÉLEZ LARA**, por los intereses de mora que se causaron y se causen sobre las sumas de capital contenidas en la pretensión PRIMERA, a la tasa máxima legal permitida, desde el día en que se presentó la mora y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

TERCERA. Que se condene en costas procesales y agencias en derecho a la demandada”

La demanda anterior inicialmente fue direccionada a los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín, correspondiendo por reparto al JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, quien, por auto del 29 de septiembre de 2020, al considerar que no era competente para conocer de la misma la rechazó de plano y ordeno remitir la demanda y sus anexos a la Oficina Judicial de Medellín, para que fuera asignado por reparto a los Jueces Laborales del Circuito de Medellín.

En virtud de lo anterior el proceso fue repartido al JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN, quien, por auto del 27 de enero de 2021, negó la solicitud de mandamiento de pago al considerar que las facturas aportadas no cumplían los requisitos para ser tenidas como un título ejecutivo, indicando que por tal motivo debería iniciarse un proceso ordinario laboral para la declaratoria del derecho.

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte ejecutante, presentó recurso de reposición y en subsidio apelación manifestando que aduce el Juez que las facturas de venta de servicios de salud allegadas para sustentar la pretensión ejecutiva, cuentan con elementos como: nombre de la demandada como cliente, el valor, la fecha de vencimiento, la firma de radicación y aceptación, lo que, de entrada, permite verificar que en efecto cumplen con los requisitos mínimos que debe contener no solo un título valor –factura de venta-, sino además, un título ejecutivo que al día de hoy es exigible ante la jurisdicción (porque está de plazo vencido); sin embargo afirma no estar de acuerdo con dicha postura por lo siguiente.

que la factura como título valor es aquella que se emite por una venta o prestación de servicios, de modo que, si el vendedor que entrega un producto o servicio, quiere asegurarse de poder cobrar judicialmente la factura, o endosarla, debe hacerla firmar por el cliente en señal de recibo y aceptación, y asegurarse de que cumpla con todos los requisitos señalados en el artículo 774 del estatuto mercantil, que además señala que debe cumplir los requisitos que contempla el artículo 621 del mismo Código de Comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario.

Que, además, la demanda ejecutiva no se presentó –aun cuando era perfectamente posible- en virtud del título valor factura de venta, sino como título ejecutivo que, de acuerdo con las normas aplicables permiten la procedencia pacífica del mandamiento ejecutivo, esto es, el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, acerca de la viabilidad de la ejecución, teniendo en cuenta que no se está ante una relación laboral propiamente, sino, ante una prestación de servicio.

Cita además el artículo 422 del C.G P que establece que “Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él...”, precisando además que no debe perderse de vista que, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de las altas cortes, todo título valor es a su vez, un título ejecutivo, sin embargo, no todo

título ejecutivo es un título valor. Esto resulta importante de cara a insistir en que con las facturas aportadas se está solicitando la ejecución como título ejecutivo sin desconocer que en el fondo las facturas son en sí mismas títulos valores, aunque no se esté ejerciendo la acción cambiaria contenida en el Código de Comercio.

Que además no comprende la razón por la cual el juez aduce que se está en presencia de un título ejecutivo complejo, ni mucho menos que se requiere que los pacientes atendidos por el demandante hayan suscrito algún documento adicional que se haya debido aportar junto con las facturas de venta, precisando que un título es simple cuando la obligación se encuentra vertida en un único documento y complejo si se requieren varios documentos para que surja la obligación clara expresa y exigible.

Frente a lo argumentado por el despacho con respecto a la no presencia de la aceptación del deudor indica que ¿Será poca constancia de aceptación la firma del deudor en la factura (con valor y fecha de vencimiento) sin que se evidencie rechazo alguno de la misma o glosa posterior, que, en gracia de discusión, constituyen negaciones indefinidas (no rechazo y no glosa) y por lo tanto dispensadas de prueba pues deberá probarlas precisamente la demandada si es que las alegase como excepciones de fondo dentro del presente proceso ejecutivo cuando y como la norma procedimental lo prescriba?

Así mismo indica que la oportunidad para rechazar las facturas o formular glosas sobre las mismas en el mismo proceso ejecutivo, adicionando que es una prestación clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación; y, es exigible cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido, tal como en este caso sucede.

Que por lo anterior, es evidente que se está en presencia de un título ejecutivo simple, pues de las facturas aportadas para su ejecución se desprenden, sin necesidad de realizar mayores razonamientos, obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, por lo que, no se requieren

documentos adicionales, máxime si se tiene en cuenta que todas las facturas cuentan con la constancia de recibido por parte de la entidad a la que se le prestó el servicio y se encuentran irrevocablemente aceptadas pues no se reclamó en su contra en el término establecido por el Código de comercio o en las normas que sobre facturación en salud.

Que no se requiere ningún documento adicional a las facturas presentadas y mucho menos uno que provenga del paciente, puesto que, como se narró en los hechos de la demanda, las facturas sobre las cuales se solicita su ejecución devienen de una prestación de servicios a la entidad demandada y es por esto que dichos títulos son generados a nombre de ésta como contratante del servicio y no del paciente (como erradamente lo afirma el despacho a quo). Entidad que por demás no rechazó su contenido luego de recibida cada factura.

Que las facturas todas contienen una obligación expresa (el pago de una suma determinada de dinero), líquida (la misma suma de dinero) proveniente del deudor -demandado-, todas están suscritas y por tanto aceptadas, y son todas actualmente exigibles por cuanto se encuentra de periodo vencido (fecha de vencimiento en el documento); por lo que se interroga, ¿qué otro requisito legal debería exigirse para constituir un título ejecutivo en los términos establecidos en la ley?.

Que aun asumiendo que se está ante un título ejecutivo complejo, vale aclarar que la unidad del título complejo NO se refiere a un concepto material exclusivamente, sino a una noción jurídica, por tanto, se hace necesario establecer el cumplimiento de los requisitos constitutivos de la prestación, más no el acopio de un sinnúmero de documentos desligados, que no tengan como fin la acreditación de la obligación expresa, clara y exigible. Así lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, y que en este sentido se equivoca el juzgado al suponer que debe haber documentación añadida diferente al título ejecutivo (facturas de venta), que en efecto cumple con los presupuestos de contener una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la demandada y en favor del ejecutante, y que exigir requisitos diferentes vulnera el principio de legalidad.

Que además, el despacho basa su negativa en unas normas del Decreto 4747 de 2007: “Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones” y en la resolución 3047 de 2008 “Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007”. **Normas no aplicables en este caso en la medida en que el emisor de las facturas, demandante, no es una IPS sino una persona natural, médico que le ha prestado un servicio personal a la EPS demandada.**

Que, al margen de lo anterior, tampoco habría argumentos para denegar el mandamiento de pago ya que el ejecutante, el médico Francisco Vélez emitió y presentó las referidas facturas, las cuales, no fueron rechazadas, tachadas, ni cuestionadas de ningún modo, cumpliendo así con los artículos 21, 22 y 23 del Decreto 4747 de 2007, al tener la posibilidad la demandada de realizar glosas o incluso, devoluciones, sin embargo, no lo hizo (o debería probarlo).

Por lo anterior, solicita se revoque el auto del 27 de enero de 2021 en lo concerniente a la negación de librar mandamiento de pago, y, en consecuencia, se acceda a dicha petición de librar mandamiento de pago.

No obstante, lo anterior considera la Sala que no es competente para conocer de dicho recurso por lo siguiente.

ALEGATOS DE CONCLUSION

Las partes no presentan alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de los jueces pertenecientes a las distintas jurisdicciones, se encuentra expresamente señalada en la ley, precisándose además que existe la cláusula general de competencia asignada por el legislador según la cual

acorde a lo establecido en el artículo 20 del C.G.P, corresponde a los jueces civiles del circuito conocer en primera instancia de los asuntos enumerados en dicho artículo, así como: “11. *Los demás procesos que no estén atribuidos a otro juez*”.

En este contexto, sea lo primero indicar que el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del trabajo y la seguridad social, fue modificado por el Artículo 622 del código general del proceso que se encuentra vigente, quedando así:

“La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”.

Es clara la normativa en señalar que las controversias jurídicas para que conozca el juez laboral deben darse entre dos partes; por un lado entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y por el otro con las entidades administradoras o prestadoras, llámese IPS, EPS, sin que tenga sentido interpretar el artículo como que todos pueden demandar a cada uno individualmente considerado, pues no se observa que un afiliado pueda demandar a un beneficiario o a un usuario o a un empleador por conflictos de seguridad social como exigirle una pensión por ejemplo si se ha afiliado y cotizado por el trabajador, en el mismo sentido las controversias entre una EPS y una IPS, o entre un particular y una EPS o IPS relativas a contratos entre ellas para prestar el servicio o para suministrar materiales no son competencia del juez laboral como lo dice expresamente el artículo en su último aparte, por ello no tiene sentido pretender que un cobro de servicios por unas personas atendidas, sea estrictamente un asunto de seguridad social, pues se trata aquí de **ejecutar y declarar** las obligaciones plasmadas en **facturas de venta comerciales** de un particular a una IPS por atenciones y procedimientos médicos.

El marco de competencia del juez laboral para la seguridad social se adscribe al sujeto de la seguridad social, es decir, el afiliado, usuario o

beneficiario verbigracia asuntos como la no prestación del servicio en oportunidad para un usuario o un beneficiario, la prestación tardía del mismo, la no realización de exámenes, tratamientos u operaciones, la no entrega de medicamentos, o el no reconocimiento de un derecho pensional o de una indemnización de origen común o profesional frente al usuario o al mismo empleador en asuntos relativos a problemas de afiliación y cotizaciones, etc., pues hoy ni siquiera los asuntos relativos a la responsabilidad de un médico frente a un usuario de la seguridad social o cualquier tema relativo a contratos le corresponde a la jurisdicción laboral, sino a la jurisdicción civil o administrativa, según sea el caso.

Así lo ratificó la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, mediante decisión del **23 de marzo de 2017**, dirimiendo un conflicto de competencia en proceso Ejecutivo del Hospital Universitario de Santander contra la EPS. Cafesalud, y en cual se expone:

“... un nuevo análisis de la situación que plantea el conflicto que ahora reclama la atención de la Corte, hace necesario recoger dicha tesis y, en lo sucesivo, adjudicar el conocimiento de demandas ejecutivas como la que originó este debate, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, teniendo en cuenta las razones que a continuación se exponen.

Es cierto que uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar en un solo estatuto el sistema de seguridad social integral, al tiempo que la Ley 712 de 2001 le asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias surgidas en razón del funcionamiento de tal sistema, como así lo prevé el artículo 2º, numeral 4º, cuyo texto señala que es atribución de aquella:

(...) 4.- Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

Ocurre sin embargo que dicho sistema puede dar lugar a varios tipos de relaciones jurídicas, autónomas e independientes, aunque conectadas entre sí.

La primera, estrictamente de seguridad social, entre los afiliados o beneficiarios del sistema y las entidades administradoras o prestadoras (EPS, IPS, ARL), en lo que tiene que ver con la asistencia y atención en salud que aquellos requieran.

La segunda, de raigambre netamente civil o comercial, producto de la forma contractual o extracontractual como dichas entidades se obligan a prestar el servicio a los afiliados o beneficiarios del sistema, en virtud de lo cual se utilizan instrumentos garantes de la satisfacción de esas obligaciones, tales como facturas o cualquier otro título valor de contenido crediticio, el cual valdrá como pago de aquellas en orden a lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio.

Así las cosas, es evidente que como la obligación cuyo cumplimiento aquí se demanda corresponde a este último tipo de relación, pues surgió entre la Entidad Promotora de Salud Cafesalud S.A., y la Prestadora del servicio Hospital Universitario de Bucaramanga, la cual se garantizó con un título valor (factura), de contenido eminentemente comercial, la competencia para conocer de la demanda ejecutiva, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.”

Obsérvese que según la jurisprudencia transcrita la razón para atribuir a la justicia civil el conocimiento del asunto fue en razón a que la controversia suscitada se encontraba enmarcada dentro de la segunda de las relaciones aludidas en dicha sentencia, esto es, por ser una relación de raigambre netamente civil o comercial, producto de la forma contractual o extracontractual como dichas entidades se obligan a prestar el servicio a los afiliados o beneficiarios del sistema.

En razón de lo anterior considera la sala que así se trate de un proceso ordinario u ejecutivo donde se pretenda la declaratoria del reconocimiento y pago de los servicios y procedimientos médicos hospitalarios prestados realizados por el Francisco Javier Vélez Lara para ESIMED S.A, con fundamento en las facturas allegadas para cada uno de estos cobros, dicho asunto conforme a las consideraciones expuestas es competencia de la jurisdicción civil, al tratarse igualmente de una relación de raigambre civil o comercial, producto de la forma contractual o extracontractual como las entidades se obligan a prestar el servicio a los afiliados o beneficiarios del sistema de salud.

Por lo anterior, considera la sala que la jurisdicción ordinaria laboral no tiene competencia para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda ejecutiva instaurada en esta oportunidad, y mucho menos el a quo

debió resolver la solicitud de mandamiento de pago al no ser competente para conocer de la misma, pues según lo argumentado **es un asunto que debe ser ventilado en la jurisdicción civil**, y en consecuencia mucho menos tiene competencia esta Sala para estudiar el recurso planteado, razón por la cual se deja sin valor el auto de junio 15 de 2021 que admitió el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte ejecutante.

ahora, con respecto a una posible prorroga de la competencia debe advertirse lo siguiente.

El artículo 16 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso, establece:

“PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.

La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente”.

Sobre este aspecto, La Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia en providencia AC3729-2017 del 13 de junio de 2017, mediante el cual resolvió un conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Veintiuno Civil Municipal de Bucaramanga (Santander) y el Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá D.C., indicó lo siguiente:

“Al respecto la Sala, en virtud de la «inmutabilidad de la competencia» ha fijado pautas para que en aquellos casos donde la célula judicial haya tramitado el respectivo asunto, unilateralmente no pueda apartarse de este porque en su entender, consideró que no era el competente para seguir adelante con el proceso, por lo que el Juez podrá declinar dicho

conocimiento, siempre y cuando, la parte demandada haya presentado las respectivas excepciones en ese sentido.

3. En reiteradas oportunidades, en este sentido ha expuesto la Corte que:

“(…) Contrario sensu, si el operador judicial admite la demanda o verbi gratia libra mandamiento de pago, la competencia queda fijada, y, en cuanto refiere al factor territorial, únicamente podrá declinarla en el evento de que prosperen los cuestionamientos formulados por los demandados a través de los conductos procesales establecidos para ello. Así mismo, el silencio de la parte pasiva frente a esta situación, igualmente conlleva al saneamiento de la presunta nulidad que por dicha circunstancia pudiese brotar, por lo tanto no es dable al juez declararse incompetente por el sobredicho factor” (CSJ AC 13 de Feb. 2012 Rad. 2012-00037-00. Reiterada en CSJ AC 31 enero 2013 Rad. 2012-02927-00).

En el mismo sentido se ha aclarado que el juez no podrá variar o modificar la competencia a su libre arbitrio “cuando la pasó por alto en la oportunidad que le confiere la ley procesal, esto es, al calificar la idoneidad del escrito introductor…” de suerte que “si por alguna circunstancia la manifestación del demandante resultare inconsistente, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para tal efecto” (CSJ AC 8 Nov. 2011. Rad. 2010-01617-00. Reiterada en CSJ AC 31 enero 2013 Rad. 2012-02927-00).

Así mismo, expuso que: Las discusiones que surgen respecto a la facultad de encargarse de los procesos han impuesto la fijación de pautas destinadas a consagrar la “inmutabilidad de la competencia”, principio en virtud del cual, cuando se ha asumido un asunto sometido al arbitrio de la justicia, el funcionario sólo puede separarse del mismo cuando la parte contraria hace uso de los mecanismos idóneos para establecer que su definición corresponde a otro juzgador (CSJ AC 20 mayo 2013. Rad. 2013-00614-00).

Sobre el particular, la Corte ha explicado que “al juzgador le asiste liminarmente el deber de evaluar lo relativo a la competencia para asumir el trámite de un asunto particular, con sujeción a los factores expresados por el petente en su demanda, toda vez que si considera que no la tiene así deberá declararlo, rechazando el escrito incoativo y remitiendo el expediente al funcionario judicial que estime competente. De modo tal, que esta es la oportunidad legal que le asiste al juez para expresar su incompetencia para tramitar un proceso. (…) Contrario sensu, si el operador judicial admite la demanda o verbi gratia libra mandamiento de pago, la competencia queda fijada.

Así mismo, el silencio de la parte pasiva frente a esta situación, igualmente conlleva al saneamiento de la presunta nulidad que por dicha circunstancia pudiese brotar, por lo tanto no es dable al juez declararse incompetente por el sobredicho factor” (CSJ AC 8 Sept. de 2011. Rad. 2011-01755-00. Reiterado en CSJ AC 20 mayo 2013. Rad. 2013-00614-00).

Partiendo de lo anterior es claro para la sala que en el presente caso no se ha librado mandamiento de pago, y mucho menos se ha notificado al demandado para que este en caso tal propusiera las respectivas excepciones, por lo que no podría hablarse bajo la prórroga de la competencia que dicho proceso tuviera que ser conocido por la Jurisdicción Ordinaria laboral.

Por todo lo expuesto considera la Sala que, no es procedente conocer del recurso de Apelación contra el auto que resolvió la solicitud de librar mandamiento de pago y, en consecuencia, esta Corporación se abstendrá de su conocimiento.

En razón de lo anterior lo legal y pertinente será SUSCITAR EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, ordenando el envío del expediente para que sea repartido y decidido el mismo por la Sala Mixta de Decisión de Esta Corporación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, **RESUELVE:**

PRIMERO: DEJAR sin valor el auto de junio 15 de 2021 mediante el cual se ADMITIO el recurso de apelación, y en su lugar se **ABSTIENE** de conocer el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante contra el auto que negó la solicitud de librar mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por FRANCISCO JAVIER VELEZ LARA contra ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A. - ESIMED S.A-, según lo expuesto en la parte motiva del presente auto.

SEGUNDO: En razón de lo anterior, se SUSCITA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, ordenando el envío del expediente para que sea repartido y decidido el mismo por la Sala Mixta de Decisión de Esta Corporación.

TERCERO: Lo anterior se notifica por ESTADOS

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 130 del 27 de julio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>